

PERIODO
PRESIDENCIAL.
002553
ARCHIVO

INFORME DE ANALISIS

(AL 02 DE AGOSTO DE 1991)

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

A. ANALISIS POLITICO

Este informe aborda un tema quizás reiterado, pero puesto ahora en un contexto algo distinto: la señal de un IPC que rondará el 1,8 por ciento, se produce en un momento marcado por al menos tres elementos: 1) el hecho de que hayamos pasado ya el ecuador de este año y que se nos reduce, por tanto, el margen para alcanzar las metas anti-inflacionarias previstas, 2) que hay signos de presiones sectoriales que, no por ser "normales", dejan de ser señales a considerar, y 3) que se acerca el inicio del debate presupuestario para el ejercicio 1992.

I. La necesidad del rigor en el manejo económico?

Es ampliamente reconocido que, hasta ahora, el Gobierno ha tenido éxito en el manejo de las variables macroeconómicas. Sin embargo, las medidas que debieron adoptar el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, así como la resistencia del IPC a descender a los niveles requeridos para mantener la meta del 18 por ciento de inflación anual, son hechos que se utilizan para crear la percepción de que ese manejo no está consolidado, a través de un debate público que es alimentado, casi no hay necesidad de señalarlo, por la derecha.

Ahora bien, al contrario de lo que pudiera concluirse, la actual incertidumbre que se persigue crear demuestra, a partir de ese debate, que no están dadas las condiciones para aflojar el control de las variables macroeconómicas. Por el contrario, creemos que debe persistirse en ello y mantenerse el rigor del manejo económico.

II. Presiones sectoriales

Es obvio que los conflictos sectoriales constituyen presiones para que se modifique el manejo de la economía. Pese a que ellos no conforman un cuadro generalizado de conflictividad laboral o social en el país, se trata de presiones que deben tenerse en cuenta, puesto que incluso encuentran apoyo dentro de los propios partidos de la Concertación y se transforman, por tanto, en factores que no sólo pueden afectar la marcha económica sino también la fortaleza de la alianza.

Es cierto que el surgimiento de los conflictos sectoriales puede ser interpretado, como lo ha hecho el Gobierno, como un signo del éxito de la transición y del comienzo de la consolidación del proceso democrático. Respetando este significado positivo de los conflictos sectoriales, creemos imprescindible que se eviten los

problemas y tentaciones que en otras transiciones han llevado a ceder en el control de las variables macroeconómicas y a inclinarse por soluciones de carácter populista que han desestabilizado los procesos democratizadores.

La consolidación democrática no implica sólo haber dejado atrás el riesgo de involución o de regresión autoritaria, sino también generar las bases económicas y políticas para que la apertura de los espacios participativos que caracterizan la democracia no creen peligros de polarización al carecerse de la capacidad para satisfacer las demandas que dichos espacios necesariamente potencian.

Es, entonces, necesario evitar que las presiones sectoriales alteren el manejo responsable y gradualista que se ha hecho de la economía.

III. Los desafíos para el Gobierno

Como se desprende del análisis de las más recientes encuestas de opinión, y tal como ya lo señaláramos en informes anteriores, las presiones sociales surgen desde las propias bases sociales que apoyan al Gobierno. Esto nos plantea el reto de tener que responder a tales demandas porque esos sectores son, por principio, parte de lo que justifica al gobierno de la Concertación y porque debemos evitar que se transformen y consoliden como tendencias de oposición, en vez de tendencias de bien intencionada crítica.

Es por ello que hay que buscar una fórmula para articular las presiones sectoriales con el manejo responsable y gradualista de la economía.

Un primer paso en esa dirección podría ser el cambio del énfasis del discurso con que se argumenta en favor del estricto control de las variables macroeconómicas. Hasta ahora, el acento se ha puesto en el control mismo y, por tanto, ha sido un discurso que aparece dirigido más hacia el sector empresarial que hacia los sectores que constituyen nuestra base social de apoyo. Esto se percibe desde estos sectores sociales y políticos como una suerte de "continuismo".

Lo que debería hacerse es acentuar, sin abandonar el tema del control de las variables macroeconómicas, aquellos elementos del manejo económico que rompen con el esquema neo-liberal que caracterizaba al anterior régimen. Nos referimos a temas que puedan describir o ilustrar tanto el crecimiento como la equidad: por ejemplo, las mejoras salariales, la inversión productiva y los esfuerzos por crear nuevos y mejores empleos, los efectos sociales de las políticas de control de la inflación, el apoyo a la pequeña y la mediana empresa, la innovación tecnológica, los nuevos estilos gerenciales, la diversificación productiva, etc.

Un segundo paso debe ser el necesario esfuerzo que debe realizarse para mejorar la administración del gasto social, de modo de asegurar su efectividad.

Un tercer paso es la paulatina apertura de nuevos espacios de participación en cada uno de los tres niveles básicos: la empresa, el gobierno interior (comuna y región) y el espacio nacional. Creemos que el nivel de la empresa será más y más significativo. Un gobierno democrático no puede obviar el objetivo de participación y el empresariado debe entender que la democratización de la norma laboral en el contexto de un modelo de relaciones laborales no conflictivas evita polarizaciones y produce estabilidad, lo que conlleva beneficios a ellos mismos.

Aunque no sea propio del Gobierno inmiscuirse en el mundo empresarial privado, quizás sí podrían buscarse fórmulas para hacer conciencia en el empresariado de que el tema de las relaciones laborales es un problema necesario de resolver para el éxito de una economía que se rige por normas que ellos comparten y propician.

Todo lo anterior puede tener un momento de condensación en la próxima elaboración, presentación y debate del Presupuesto para 1992. En ese instante el Gobierno estará emitiendo una señal que debe poseer los elementos necesarios para dejar clara la dirección en la que se quiere apuntar.

IV. Re-alineación de los actores pro-gubernamentales

El momento de la elaboración y debate presupuestario será una prueba, sin duda, de la capacidad que el Gobierno aún tiene para sumar a su estrategia a actores como la CUT, los partidos políticos de la Concertación y sus parlamentarios. Y ello porque la señal "Presupuesto" debiera darse en un contexto en que se reitere la vigencia de la lógica restrictiva que debe regular a las demandas sociales. Sólo que ahora tal tarea se verá dificultada con la persistencia de ciertos desencuentros entre algunos socios de la Concertación; desencuentros que pueden verse exacerbados en la medida en que el trámite parlamentario vaya evolucionando de acuerdo con las fechas pactadas para tener elecciones municipales en Junio de 1992.

En otras palabras, el Gobierno estará obligado a conjugar en un mismo llamamiento la invocación a conductas responsables y los estímulos destinados a incrementar la mística (o las convicciones) en nuestra conducción. Se deberá, por eso, redoblar esfuerzos para re-alinear tras una perspectiva de Estado a actores pro-gubernamentales que estarán más presionados por lógicas contrarias a las que se requieren para aquéllo.

B. ANALISIS ECONOMICO

Como se ha hecho habitual en las últimas semanas, en el ámbito económico se vive un ambiente de expectativas positivas, el cual se basa en la favorable evolución de los indicadores globales de la actividad y en la confianza que la autoridades económicas inspiran a la mayoría de los agentes.

En este contexto de calma, cobran importancia los indicadores de corto plazo y alta variabilidad (precio de las acciones, valor del dólar, expectativas de IPC), que puedan señalar posibles cambios en la situación de estabilidad que se vive. Asimismo, los analistas aprovechan esta coyuntura -en la cual no hay una crisis que enfrentar- para proponer medidas que permitan profundizar el camino de crecimiento que el país sigue, y a la vez tratar de conciliarlo con otros objetivos económicos y sociales relevantes.

Dado que los agentes consideran al IPC y al dólar como variables muy relevantes a la hora de tomar sus decisiones, vale la pena comentar su actual situación.

Después de un mes recibiendo del Banco Central una señal de 1,8% de IPC para Julio, recién en los últimos días los operadores económicos han aceptado dicho pronóstico y lo han incorporado en sus decisiones. Hasta hace un par de días las expectativas se habían estabilizado en 2%. Al parecer los precios observados en los últimos días -se encuesta hasta el día 2 de agosto para calcular el IPC de Julio- presentan algunas bajas en Vestuario, que amortiguarían las alzas generales, empujadas principalmente por el rubro Alimentos (principalmente Carnes).

El IPC de Julio se dará a conocer la próxima semana, junto con el resto de los indicadores coyunturales. En esa ocasión será muy importante el nivel que alcance la Ocupación porque ello será un indicador del ritmo que está adquiriendo la reactivación.

Uno de los elementos que ha dificultado la lucha antiinflacionaria ha sido la emisión de dinero por parte del Banco Central a través de las operaciones de cambio (compra de dólares). Este fenómeno, propio de una situación de superávit como la que vivimos, está siendo atacado con medidas inmediatas (como el encaje a la entrada de capitales de corto plazo y el alza en el impuesto de timbres y estampillas a dichos capitales) y con medidas más estructurales, que tardan algún tiempo en manifestarse plenamente (como la rebaja de aranceles). Adicionalmente, el Banco Central redujo el tipo de cambio para desincentivar la venta de dólares al instituto emisor.

A pesar de las medidas inmediatas, y esperando el efecto sobre las importaciones que tendrán la rebaja de aranceles y el crecimiento de la actividad, el valor del dólar ha vuelto a bajar hasta el piso de la banda del tipo de cambio acuerdo. Esto significa que nuevamente el Banco Central está obligado a comprar dólares, emitiendo dinero.

Para evitar que esta mayor cantidad de dinero entre a circulación, presionando sobre los precios, el Banco Central procura absorberla ofreciendo pagarés a tasas de interés atractivas. Sin embargo, este mecanismo, por una parte, tiende a incrementar el déficit del Banco Central y, por otra, induce a un alza de la tasa de interés lo cual puede afectar la reactivación.

En ese esquema, que no es grave, pero que tampoco es sostenible a largo plazo, hay diferentes opciones a nivel macroeconómico que, en cierta medida, están asociadas a visiones diferentes sobre el rol del Estado.

El abanico de posturas oscila entre quienes creen que el Estado debería aprovechar la holgura externa para realizar grandes inversiones en infraestructura, que los privados no están dispuestos a realizar, y aquellos que plantean que el sector público debería reducir su gasto, de modo que deje de competir por recursos financieros con el sector privado y así tienda a bajar la tasa de interés y se acelere la reactivación.

Entr ambos extremos hay múltiples combinaciones y puntos intermedios, como por ejemplo mantener el esquema actual conservando la austeridad en las cuentas fiscales y esperando que la rebaja de aranceles tenga el efecto deseado.

En todo caso, la coyuntura actual puede ser un momento muy fecundo, porque la estabilidad permite enfrentar con visión de largo plazo las distintas opciones, pero también es muy riesgoso, porque no sería bueno para la democracia que esta oportunidad de crecer con estabilidad de precios y con equidad fuese desaprovechada.